

(Texto leído en el evento Una Cruzada abierta de la evaluación a la acción  
23.02.2015)

Señora Secretaria,  
Distinguidos miembros del presídium,  
Señoras y señores,

No hay para los graves problemas que determinan la pobreza y la desigualdad en México ni soluciones mágicas ni fórmulas prefabricadas. Asumir la realidad social como complejidad problemática nos aleja de las recetas fáciles que a veces teñidas de pragmatismo dan vueltas sobre los problemas como tiovivo incesante, también nos obligan a una actitud de apertura, de tolerancia, de respeto a lo diverso; es decir, de diálogo.

La deliberación pública no elude tomas de posición, ni disuelve discrepancias; no desdibuja posiciones políticas o escalas de valores. Es en cambio, producto de una doble convicción: aquella que asume que no existen verdades absolutas y aquella otra que entiende que en el interlocutor hay no solo diferencias sino también coincidencias, no se dialoga para documentar prejuicios, verdades reveladas paradigmas inmutables, no se dialoga para descalificar , minimizar , tergiversar o contemporizar. La deliberación pública es siempre polémica, crítica, y apasionada porque su fruto sustancial es la convergencia de propósitos; no la simulación ni la componenda.

Las evaluaciones institucionales tanto las elaboradas desde el Instituto Nacional de Salud Pública o desde el Instituto Nacional de Nutrición, como la auditoría de desempeño elaborada en relación con la Cuenta Pública 2013 por la Auditoría Superior de la Federación o la amplia evaluación de las políticas sociales en donde queda enmarcada la evaluación de la CNCH por parte de CONEVAL; nos servirán a ciudadanos y ciudadanas, pero sobre todo a funcionarios públicos para documentar con verdad las dimensiones del hambre y de la pobreza en el país: los avances obtenidos en el diseño e implantación de políticas públicas y el esfuerzo que aún se requiere realizar.

Pero la verdad para que cumpla su función progresista tiene que estar inevitablemente acompañada de la esperanza de que con el concurso de todos y todas podemos salvar obstáculos y escollos. La esperanza, para que no devenga en utopía irrealizable tiene que estar obligadamente asentada en proposiciones viables y en caminos realistas Y no hay mayor realismo que el que provoca en los funcionarios públicos una buena evaluación para rectificar donde sea necesario, mantener continuidad y profundizar en donde existen espacios de mejoramiento.

Hace casi dos años en el foro público para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo sobre Inclusión Productiva realizado en la ciudad de Puebla ante una distinguida concurrencia encabezada por el Presidente de la República, el

gobernador del estado de Puebla y la secretaria de Desarrollo Social presenté cuatro retos que, en mi opinión, enfrentaría la Cruzada contra el Hambre.

El primero en el ámbito federal es de coordinación intersecretarial donde se requiere un alineamiento presupuestal que supere la fragmentación y sobre todo corrija el sesgo regresivo del gasto social. Dije entonces que el reto se encuentra en el presupuesto y en la reforma al gasto público.

El segundo reto es de competencias. ¿Qué corresponde a cada nivel de gobierno y qué a la sociedad civil? Y añadía que colocar en el centro a las comunidades locales –como se planteaba correctamente- equivalía a una verdadera revolución copernicana en un país con una fuerte tradición centralista. Por cierto proponía y sigo proponiendo que habría que analizar una propuesta que algunos académicos plantearon en los ochentas consistente en constituir a la comunidad como cuarto orden de gobierno.

El tercer reto es de representaciones. ¿Cómo lograr representación de las comunidades cuando en ocasiones están desarticuladas? ¿Cómo asegurarnos que los mecanismos de consulta ciudadana influyan en el diseño y la implementación de políticas públicas? ¿Cómo evitar clientelismo y manipulación política tan proclives en los programas sociales?

El cuarto reto es lograr convergencia entre protección social y fomento productivo. El capital humano –educación y salud- y el capital social –lazos solidarios y cooperación- se consumen no con su uso sino con su falta de uso. Es decir, sin actividades productivas, sin crédito, sin empleo, el capital humano y social se erosiona y se disipa.

Todos estos retos que siguen siéndolo pero que han sido asumidos por el gobierno en la implementación de la CNCH desde 2013, han sido ahora revisados y comentados tanto por la Auditoría Superior como por CONEVAL en sus respectivos documentos cuyas presentaciones escucharemos en un momento.

Es claro que para enfrentar estos retos se necesita de todos y de todas: de las comunidades, de las organizaciones, de las ONGs, de los distintos niveles de gobierno, de los tres poderes de la Unión, de los medios, de los partidos políticos, de las universidades, de la academia, de las empresas.

La alimentación es tan estratégica que no puede quedar ni al arbitrio de los mercados, ni a la buena vibra de los gobernantes ni a los vaivenes de las coyunturas políticas. No somos una gran potencia agrícola como otros países pero si podemos alcanzar apoyando a la agricultura familiar, el anhelo que creo que es de todas y todos de reducir pobreza, desnutrición y desigualdad y aumentar ingresos, producción, empleo y productividad. Así estaríamos articulando el derecho a la alimentación con la soberanía alimentaria.

Cuando vemos en los pobres, personas que merecen caridad, y compasión no estamos entendiendo la enorme reserva de dignidad, creatividad y potencial productivo que tienen los sistemas familiares en pequeña escala. No estamos entendiendo el efecto multiplicador de un peso invertido entre personas afectadas por el hambre y la pobreza. Esto se ha demostrado una y otra vez en el mundo.

Ponernos como objetivo aumentar la productividad en los sistemas familiares en pequeña escala desataría un círculo virtuoso de incremento de productos, de ingresos y de nivel de vida.

Una democracia incipiente como la mexicana requiere debate y discusión; genera disensos pero también permite alcanzar consensos. La deliberación pública es vital para la democracia. La rendición de cuentas es indispensable. Borrar el enorme tatuaje que nos marca: la desigualdad, es imperativo. Construir una política de Estado con amplio apoyo social y político para enfrentar hambre, desnutrición y pobreza es la misión central de esta generación.

El compromiso contra el hambre de toda la comunidad nacional es para hoy. Pero todas y todos que no nos encontramos en esas inaceptables situaciones también enfrentamos la encarnizada urgencia del ahora. Porque hay que reconocerlo: una democracia con tantos pobres, es una pobre democracia.